

Panamá es la nueva barrera en el retorno al sur

Las políticas migratorias más estrictas impuestas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han generado un fenómeno de migración inversa: miles de migrantes que soñaban con llegar a Norteamérica ahora buscan regresar a sus países de origen o encontrar un nuevo destino. Sin embargo, en Panamá han encontrado un nuevo obstáculo que los mantiene en un limbo, sin posibilidades claras de retorno.

Pese a que las autoridades de Costa Rica y Panamá anunciaron un protocolo para gestionar el regreso de los migrantes irregulares y evitar que queden en situación de calle, en la práctica, las condiciones para su retorno siguen siendo precarias.

Según datos oficiales, más de 2.000 personas habían transitado por Panamá con destino a Sudamérica hasta la última semana de marzo. La mayoría son trasladadas en autobuses, cuyos costos deben asumir ellas mismas (unos \$160), desde Costa Rica hasta los refugios de Lajas Blancas y San Vicente, cerca de la selva del Darién. No obstante, estos campamentos –conocidos como Estaciones de Recepción Migratoria (ERM)– han sido denunciados por sus condiciones inhumanas. A la prensa se le ha impedido el acceso.

Quienes llegan a estos albergues los describen como «cárceles», de las que no pueden entrar ni salir sin autorización. En redes sociales, migrantes indican que aunque se les da comida, deben dormir en el suelo, sobre cartones, que el suministro de agua se corta a las 5:00 p.m. y que son tratados «como animales», lo que los lleva a abandonar los refugios en busca de alternativas para regresar.

De acuerdo con una investigación de *El País*, en los últimos cuatro meses, 2.925 personas han pasado por Lajas Blancas con la intención de devolverse a sus países: 75% del total registrado solo fue en el mes de febrero. Mientras tanto, en el refugio de San Vicente, las autoridades panameñas han aislado a 103 de los 299 migrantes deportados desde Estados Unidos, en su mayoría originarios de Asia.

A finales de febrero, en Lajas Blancas había al menos 500 migrantes, principalmente venezolanos y colombianos.

Con la esperanza de cerrar el ciclo de meses de movimiento de

sur a norte y ahora de norte a sur, muchos buscan rutas marítimas, a pesar de los riesgos que implica cruzar el Caribe. Otros, sin más opción, vuelven a aventurarse por los peligrosos caminos de la selva del Darién.

Luis Montilla, un venezolano de 28 años, espera en Panamá, junto a decenas de compatriotas, que sus familiares le envíen los \$260 que necesita para pagar un puesto en una lancha rumbo a Necoclí, Colombia. Sin embargo, el viaje marítimo no está exento de tragedias. El pasado 22 de febrero, Irene Sofía, una niña venezolana de ocho años de edad, murió ahogada cuando [la embarcación en la que viajaba desde Panamá a Colombia se hundió.](#)



Rutas marítimas desde Panamá a Colombia

Diego Chaves, analista del Instituto de Política Migratoria, con sede en Washington, enfatiza que esta «**migración inversa**» **no es un retorno voluntario**, sino el reflejo de una crisis humanitaria: «Miles de personas han quedado atrapadas en el limbo. No es una decisión, es un retorno forzado».

Nilson Moreno, personero de Necoclí, denunció que los migrantes que están llegando a esta población están siendo «transportados en barcos de carga, de una manera inhumana, violando los derechos a un retorno con calidad humana» y exigió a las autoridades panameñas «implementar medios de transporte que permitan regresar a los migrantes en condiciones que no comprometan su integridad, para así evitar una problemática de salud pública por el posible contagio de enfermedades».

El presidente de Panamá, [Raúl Mulino](#), anunció el cierre del Darién en el sentido sur-norte tras una [disminución de 98% en el tránsito de migrantes con destino a EEUU](#); pero aún hay personas que, sin alternativas, se ven obligadas a retornar por esta peligrosa vía.

En este sentido, el exgerente de Fronteras de Colombia Lucas Gómez aseguró: «Estamos viendo un contraflujo; esa migración de personas que ya no van al norte, sino que regresan al sur, que quedaron en una especie de limbo, y muchos de ellos deciden volver por el tapón del Darién a asentarse en Colombia», con lo que se observa un aumento de la migración venezolana en este país.

Desde Human Rights Watch (HRW) reiteran que los migrantes «tienen derecho a que su libertad de circulación no sea

restringida arbitrariamente».

Con información de TalCual